

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-SALA LABORAL**

Medellín, seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Recurso de Queja  
Exp. 012-2018-00499

La Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de queja propuesto por MARY LUZ ZAPATA RODRÍGUEZ, quien actúa en representación de SOL ANGIE RESTREPO ZAPATA, frente al auto que declaró improcedente la apelación formulada para cuestionar la providencia que libró mandamiento de pago de manera parcial, en el marco del proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral que se gestionó en contra de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER.

**ANTECEDENTES:**

La activa dio impulso a este proceso de ejecución con el fin de lograr la efectividad de la orden judicial vertida en las sentencias emitidas el 30 de septiembre de 2010 por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Séptimo laboral del Circuito de Medellín, y el 14 de junio de 2013 por el Tribunal Superior de Medellín, en favor de ALVARO AUGUSTO RESTREPO AGUDELO, quien falleció el 05 de septiembre de 2012 (Pág. 21 Archivo 01), declarándose posteriormente una unión marital de hecho que existió con MARY LUZ ZAPATA RODRÍGUEZ entre el 03 de mayo del 2000 y hasta el 05 de septiembre de 2012 (Págs. 23-24 Archivo 01), con quien procreó a SOL ANGIE RESTREPO ZAPATA (Pág. 19 Archivo 01).

Mediante auto del 09 de septiembre de 2019 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, LIBRÓ mandamiento de pago por la obligación de cotizar ante Colfondos los siguientes períodos: 29 de julio al 16 de septiembre de 2003, 09 de febrero al 22 de mayo de 2004, 05 de agosto al 04 de noviembre de 2004, 19 de mayo al 04 de junio de 2005, 01 de agosto al 30 de noviembre de 2007, 29 de enero al 29 de junio de 2007, 21 de enero al 20 de junio de 2008 y entre el 28 de julio y el 01 de noviembre de 2008. NEGÓ el mandamiento por concepto de intereses moratorios sobre las prestaciones sociales, la indemnización por despido sin justa causa y las costas procesales (Págs. 99-101 Archivo 01).

En esa oportunidad, la parte ejecutante hizo uso del recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con el fin de obtener la revocatoria del numeral segundo de la providencia que negó la ejecución sobre los intereses moratorios, por considerar no ajustado a derecho pregonar que tal concepto es ausente de la parte resolutive de la providencia, siendo que tal concepto debe pagarse desde el momento en que el deudor se constituye en mora y hasta cuando se soluciona o paga esa obligación, encontrando que como el pago ocurrió el 31 de octubre de 2016, los intereses deben reconocerse hasta esa fecha, aduciendo que el título ejecutivo está constituido en las sentencias judiciales de donde se desprenden las obligaciones claras, expresas y exigibles (Págs.102-106).

El Juzgado de conocimiento por decisión del 17 de septiembre de 2019 (Págs. 107-108 Archivo 01), rechazó por extemporáneo el recurso de reposición, y no concedió por improcedente el recurso de apelación, señalando que dicho proveído no era susceptible de apelación en razón a la cuantía de la obligación que es inferior a los veinte (20) SMLMV.

El mandatario judicial de la ejecutante acudió a la reposición y en subsidio a la queja, señalando que el recurso fue presentado oportunamente en tanto si bien el término que se tenía para radicar el respectivo memorial vencía el 12 de septiembre de 2019, no fue posible por encontrarse el despacho en protesta judicial, situación que suspendió los términos, por lo que es el 13 de septiembre

de 2019 el que debe contarse como el segundo día para presentar la reposición, lo que permite inferir que el escrito fue presentado oportunamente.

La operadora judicial mediante auto del 21 de noviembre de 2022 decidió remitir las diligencias para ser tramitada la queja (Archivo 02).

### CONSIDERACIONES:

Atendiendo las circunstancias procesales en que se ha dado desarrollo al proceso y las manifestaciones del apoderado de la activa, se tiene que el problema jurídico consiste en determinar si acertó la Juez de Instancia al rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto frente al auto que negó el mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios.

Para dar solución a tal contrariedad, acude la Sala al artículo 353 del Código General del Proceso, aplicable a estos ritos por la remisión analógica tipificada en la regla 145 del Código Adjetivo Laboral. Según esa disposición, el recurso de queja debe interponerse en subsidio del recurso de reposición contra el auto que niegue la concesión de *-en este caso-* el recurso de apelación. Esto es relevante, porque son los argumentos de la reposición aludida, los que han de ser resueltos por el superior al momento de definir si estuvo bien o mal denegado el mecanismo de impugnación.

Dentro del presente asunto, las razones esbozadas por el juez de primer grado para denegar la apelación propuesta por el mandatario judicial de la parte demandante, se circunscribieron a señalar su improcedencia por razón de la cuantía de lo que se persigue, que no permite acudir a la vía de la apelación.

Lo primero por decir es que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al regular lo concerniente a los autos que son apelables en la primera instancia, indica textualmente que son los siguientes:

1. *El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.*
2. *El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.*

3. *El que decida sobre excepciones previas.*
4. *El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.*
5. *El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.*
6. *El que decida sobre nulidades procesales.*
7. *El que decida sobre medidas cautelares.*
8. *El que decida sobre el mandamiento de pago.*
9. *El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.*
10. *El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.*
11. *El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.*
12. *Los demás que señale la ley.*

En ese orden, y en el marco de un análisis general de la disposición, es claro que el auto que decide sobre el mandamiento de pago es susceptible de alzada. Pero también, esa misma disposición normativa regula que el recurso de apelación procede contra las decisiones proferidas en primera instancia y no es admisible cuando se intentan cuestionar determinaciones tomadas en procesos de única instancia.

Al respecto, se itera que en materia laboral, son de primera instancia los procesos cuyas pretensiones superen 20 veces el SMLMV, y de única, los que contengan aspiraciones de igual o inferior monto (artículo 12 del CPTSS), siendo claro que la cuantía del trámite se determina sumando el valor de las peticiones al momento de la presentación de la demanda (artículo 26 del CGP aplicable por el 145 del CPTSS). Ya cuando el asunto carezca de cuantía, conocerán en primera instancia los Jueces Laborales del Circuito (Artículo 13 del CPTSS).

Con base en esas precisiones se replica el criterio de esta Corporación según el cual, el proceso ejecutivo a continuación es independiente del declarativo, debiendo estimarse si es de primera o de única instancia con la sumatoria de las pretensiones al momento de la radicación de la demanda ejecutiva (ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral STL6155 de 2018). En este asunto las pretensiones en las que se basa la ejecución, contiene unas acreencias económicas con las que no se alcanza el tope mínimo con el que se atribuye la competencia a los Jueces de Primera instancia, pero también, se está ante una obligación de hacer y por tanto no

pecuniaria, referida al pago de unas cotizaciones de parte de la Fundación Universitaria Esumer a la AFP Colfondos, sobre la que se accedió a dar impulso a la ejecución, prestación que en ese orden, se constituye en una sin cuantía, rasgo que asigna el conocimiento al Juez de Circuito y refleja un proceso que no se tramita bajo los ritos de la única instancia, situación que promueve la posibilidad de atacar las providencias por medio del recurso de apelación en los casos en los que así lo permita la ley.

De ese modo, en este caso no asiste razón al Juzgado de conocimiento cuando negó el recurso sobre la providencia que libró parcialmente el mandamiento de pago, puesto que las reglas de competencia dan cuenta que se trata de un proceso ejecutivo de primera instancia, por lo que la determinación adoptada por la *a quo* se constituye en susceptible de ser censurada a través del recurso vertical, lo que conlleva a declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 09 de septiembre de 2019.

En virtud de esa decisión, y atendiendo a que es de este Tribunal asumir el conocimiento del recurso, y a fin de propender por la garantía del principio de la celeridad procesal teniendo en cuenta la tardanza que ha presentado el trámite desde cuando se emitió la primera providencia que es la atacada, habrá de definirse en esta misma oportunidad, la inconformidad planteada por quien promueve la acción ejecutiva.

Para definir entonces el asunto, atendiendo los argumentos de la alzada se tiene que los artículos 100 y 101 C. P. del T. y de la S. S., contemplan que es exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento proveniente del deudor o su causante, o que emane de decisión judicial o arbitral en firme.

Asimismo, el artículo 422 del Código General del Proceso permite demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial.

Con base a lo anterior, y en virtud a que en este caso son las providencias emitidas en sede judicial las que sirven de base a la ejecución, es que procede el mandamiento ejecutivo solicitado, debiendo verificarse si a partir de su contenido es posible dar por sentado que los intereses moratorios tienen un respaldo que permita ser perseguida ejecutivamente, o si por el contrario, es acertada la decisión de la *a quo*.

Verificadas las providencias emitidas, la Fundación Universitaria demandada fue condenada a pagar unos emolumentos (prestaciones sociales, indemnización por despido sin justa causa y aportes a la seguridad social), sin que se impusiera el reconocimiento de intereses moratorios al trabajador por la tardanza en su reconocimiento, por lo que al tratarse de un mecanismo resarcitorio que no opera de manera automática, debe contar para efectos de la ejecución de una decisión declarativa donde se haya determinado su procedencia por el contexto de la situación analizada en el escenario judicial, encontrando que al respecto y de forma precisa no hubo pronunciamiento alguno, por lo que al no integrar la sentencia intereses de ninguna índole, mal pudiera advertirse, en tal sentido, que esté por tal concepto estructurado el título de recaudo ejecutivo, el que debe declarar manifiestamente el alcance de la obligación de la que se persigue su pago, por lo que atendiendo a que debe acudir a otros medios distintos de la mera observación para verificar su procedencia, no puede entenderse como un derecho declarado, cierto e indiscutible que pueda reclamarse por la vía ejecutiva, sino que se trata de un asunto que a juicio de esta dependencia debe desatarse en la vía ordinaria dispuesta para este tipo de conflictos por tratarse de una pretensión no alegada dentro de la Litis sobre la que hoy se busca su cumplimiento en su totalidad.


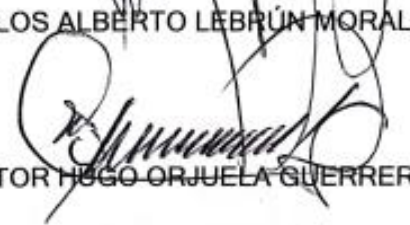

Es bajo ese orden de ideas, que lo definido por la Juez de Instancia se acompasa plenamente a las órdenes contentivas en el título ejecutivo presentado para obtener su satisfacción, por lo que al darse razón en cuanto se abstuvo de librar mandamiento de pago sobre intereses moratorios, se impone confirmar la providencia apelada.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, DECLARA MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por MARY LUZ ZAPATA RODRÍGUEZ en contra del auto del 09 de septiembre de 2019. CONFIRMA la providencia emitida el 09 d septiembre de 2019 en cuanto no libró mandamiento de pago por los intereses moratorios pedidos.

Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta decisión al Juzgado de primera instancia para que proceda de conformidad.

Se ordena notificar por ESTADOS lo resuelto.

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 156 fijados el 7 de septiembre de 2023 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.